

El Foro del Agua El Salvador ante la opinión pública nacional e internacional, se suma a la creciente ola de protesta frente a las nuevas maniobras de los partidos ARENA, PCN, GANA y PDC en la Asamblea Legislativa, orientados a la aprobación de una Ley de aguas que privatice y entregue el control del agua a la ANEP y sus gremiales empresariales.

- La privatización en El Salvador y el resto de Latinoamérica no es un mito, durante la década de los 90 se privatizaron empresas públicas como bancos, ingenios azucareros, beneficios de café, hoteles, así como los servicios públicos de electricidad, telefonía y pensiones; además, en 2003 se descartó el intento de privatizar los servicios de salud, y de la misma forma en la batalla del 2 de julio de 2007 el intento de privatizar el agua mediante la mal llamada política de descentralización impulsada por el gobierno de ARENA. Privatizaciones que han tenido severos impactos en la economía de la población y en las finanzas de los Estados.

- La privatización es un proceso por medio del cual se coloca el control y aprovechamiento del agua y sus infraestructuras fundamentales en manos de la empresa privada, con el objeto que se garanticen (ellas mismas) la máxima ganancia, por encima del derecho de la población y sin importar el agotamiento, contaminación y la destrucción de las fuentes.

- Que la privatización que se pretende imponer en el país tiene como aristas la entrega del control del agua a manos de los grandes empresarios que usan intensivamente el líquido y desmantelamiento de los sistemas de ANDA con el objeto de entregar los más rentables a empresarios nacionales y transnacionales.

- En el país la industria azucarera, concentrada en manos de dos familias: la de don Tomas Regalado Dueñas y la de don Juan Wright (quienes controlan más del 80% de la industria), utiliza casi la tercera parte del agua disponible en el territorio para el riego del cultivo de la caña de azúcar (entre 250 y 300 millones de metros cúbicos cada verano) dejando sin agua a poblaciones enteras, contaminando las fuentes y, sobre todo, sin pagar ni un solo centavo en concepto de canon por uso de este vital líquido. Para mantener este esquema donde obtienen máxima ganancia, históricamente se han opuesto a la aprobación de una Ley General de Aguas que ordene la gestión y priorice el uso del agua a las comunidades más pobres del país, amparándose en la estrategia **“en río revuelto, cosecha de pescadores”**.

- **Ahora buscan aprobar una Ley que legalice la injusticia y el despojo del agua a comunidades pobres y otras empresas del país**, que en la mayoría de ocasiones hacen de manera ilegal, es decir, la Ley Integral del Agua, busca convertir en derechos de estos grandes empresarios lo que hasta ahora han sido abusos contra la población y los ecosistemas.

- Que los partidos ARENA, PCN, PDC y GANA solo son unos instrumentos financiados por la industria azucarera para garantizar que la Ley Integral del Agua sea una pieza a la medida de los intereses económicos de la industria azucarera. De acuerdo al informe entre 2008 y 2017 sobre financistas de los partidos políticos, los azucareros, entre los que sobresalen CASSA, los Ingenios El Ángel, La Cabaña, Chaparrastique, Jiboa y las personas vinculadas a la industria como los señores Tomas Regalado Dueñas y Tomas Regalado O’sullivan, desembolsaron al menos \$3.2 millones,

siendo el principal receptor el partido ARENA, quien solo en los 2013 recibe \$1.3 millones y en 2017, \$430 mil, este mismo año los partidos PCN y PDC recibieron \$200 mil y \$80 mil respectivamente.

Como espacio amplio de participación social estamos convencidos de la urgente necesidad que El Salvador cuente con una Ley General de Aguas que brinde herramientas para revertir la crisis actual, frenar los abusos y violaciones al derecho humano de la población y se generen condiciones para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático en el país. Para ello es necesario que ARENA, GANA, PCN y PDC antepongan los intereses del país a los de estos grupos oligárquicos que los financian y que avancemos en discutir y aprobar una Ley General de Aguas que garantice la gestión pública y comunitaria, la sustentabilidad y el derecho humano de la población salvadoreña

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, juntas de agua, asociaciones de regantes, iglesias, empresas privadas y a la población en general a que nos sumemos a la Alianza contra la Privatización del Agua en El Salvador para vencer esta nueva estocada de la oligarquía salvadoreña.

San Salvador, 12 de junio de 2018